

BRASIL | AMAZONIA | TERRORISMO DE ESTADO

La floresta
que devuelve
Bolsonaro

GENOCIDIO, SAQUEO, CONTAMINACIÓN Y MUERTE



La floresta que devuelve Bolsonaro

GENOCIDIO, SAQUEO, CONTAMINACIÓN Y MUERTE

La “era Bolsonaro” quedará en la memoria colectiva sobre todo por haber promovido y ejecutado una política de genocidio contra las poblaciones indígenas. Su desenfundada y descarada promoción de las actividades que trasladaron el producto de la piratería sobre los recursos naturales hacia cuentas bancarias privadas no tiene precedentes. Es incalculable el valor del patrimonio universal que se han “cargado” en la Amazonia brasileña criminales y delincuentes de todo tipo, de cuello blanco o de pistola al cinto: recursos naturales, biodiversidad, vidas truncadas, culturas originarias diezmadas, derechos humanos y un larguísimo etcétera. Un atraco a gran escala y a la vista del mundo que —todos confiamos— finalmente se detendrá.

A principios de febrero pasado de 2022 el entonces presidente Jair Bolsonaro firmó un decreto instalando un programa de promoción y apoyo a la “minería artesanal”, más conocida como garimpo, y estableciendo una comisión interministerial para desarrollar políticas públicas tomando como región de acción a los nueve estados amazónicos del país.

Como hijo de garimpeiro —según veremos más adelante—, Bolsonaro se propuso expandir la extracción de oro fomentando una actividad mayormente dominada por grupos mafiosos y narcotraficantes que, además de facilitar el lavado de enormes capitales de turbia procedencia, solo ha aportado deforestación, contaminación y violencia contra los habitantes de la región y los pueblos originarios de la floresta.

LA FIEBRE DEL ORO

En noviembre de 2021 un rumor se viralizó entre los garimpeiros: “Hay oro en la desembocadura del río Madeira”.

Antes de que hubiese terminado el mes ya había en la zona más de 300 embarcaciones con dragas removiendo el lecho del río. Cerca de 2 mil personas habían establecido una pequeña ciudad flotante y amarrado las barcazas unas a otras formando largas barreras a lo largo del curso de agua que, prácticamente, impedían la navegación.

El garimpo es generalmente practicado de manera ilegal, y por eso se establece en lugares remotos, de difícil acceso, pero esto estaba ocurriendo en las proximidades de la ciudad de Autazes, a escasos 110 kilómetros de Manaus, la capital del estado de Amazonas.

Tal desparpajo alertó rápidamente a organizaciones sociales y ecologistas de la región.

En pocos días, asombrosas imágenes de la “ciudad garimpeira flotante” recorrieron el mundo alertando sobre la grave contaminación del río.

En esta modalidad de extracción de oro se utiliza mercurio¹ que “se pega” al polvo de oro y, una vez

utilizado, es luego desechado al curso de agua creando sedimentos tóxicos que permanecerán contaminando y haciendo imposible la vida ictícola durante siglos, así como envenenando el cauce que será utilizado aguas abajo por animales y seres humanos.

El escándalo internacional, y las protestas locales de la población que, a falta de rutas practicables,

¹ El mercurio es un metal pesado altamente tóxico para los seres humanos y la vida en general.



usaba el río como su principal vía de transporte de mercancías y desplazamientos, motivaron la intervención de la Policía Federal que, cuando llegó al lugar, encontró que la enorme mayoría de las dragas ya se había internado río arriba hasta zonas inaccesibles.

De todas formas, los agentes pudieron incendiar un par de pequeñas dragas abandonadas a la vera del río, generando imágenes para demostrar “la respuesta radical de las autoridades” sin que, obviamente, se modifique en algo la situación de fondo, léase la complicidad y corrupción estructural.

DEL DESARROLLISMO PRIMITIVO

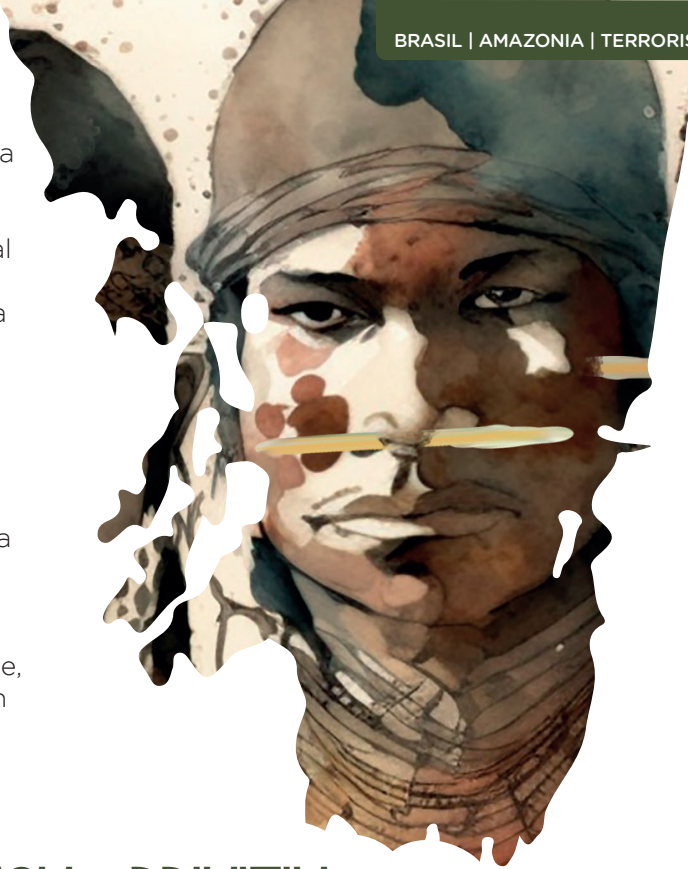
Desde hace más de medio siglo, cuando la dictadura militar (1964-1985) llamó a los brasileños a migrar masivamente hacia allí para “desarrollar la selva”,² la Amazonia asiste a una aceleración casi permanente de su destrucción generalizada.

Fauna, flora, recursos naturales, derechos sociales, económicos y humanos, libertad, justicia, organizaciones sindicales,

ambientalistas, políticas, y obviamente la vida de miles de personas, todo es lanzado a la gran implacable e impune chipeadora del lucro inmediato y a cualquier costo.

Es cierto que la misma mecánica es aplicada en casi todo el planeta por poderes similares, con beneficiarios similares, sirviéndose de similares complicidades estatales y gubernamentales.

² El gobierno militar lanzó en 1970 el “Plan de Integración Nacional”, haciendo un llamado a “integrar a la Amazonia a la economía nacional”, y liberando millones de hectáreas para su ocupación, deforestación, explotación, etc. Originalmente la Amazonia brasileña ocupaba 5 mil millones de km², hoy apenas supera los 3 mil millones.



Lo que asusta en el caso de la Amazonia es que se trata del bosque tropical más extenso del mundo, un biosistema único en el planeta donde tienen lugar innumerables procesos bio-físico-químicos de reproducción, regeneración, reciclaje de elementos esenciales para la supervivencia humana. Estremece también la persistencia, la intensidad y la escala de la destrucción que

ocurre en Sudamérica, porque calamidades análogas están sucediendo en las zonas amazónicas de Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guyana francesa, aunque reciben menos atención mediática.

...AL NEODESARROLLISMO MILITAR EN DEMOCRACIA

La política promovida por Bolsonaro durante los cuatro años de su gestión no ha hecho más que recuperar aquellos viejos delirios militares reincentivando el saqueo.

A tal punto, que el crecimiento de la extracción de maderas nobles y la posterior “quema” de todo lo que queda para liberar espacio a la soja o la ganadería rompió todos los récords anteriores, aumentando un 22 por ciento considerando solo el periodo entre agosto 2020 y julio 2021.

Esto significó la pérdida de más de 13 mil kilómetros cuadrados de floresta, guarismo sólo superado en 2006. Y luego no ha hecho

más que continuar en la misma dirección.

Lo mismo se puede decir de la contaminación masiva de los ríos por los “garimpos”.

Entre 1985 y 2020 el área explotada por la minería en Brasil creció seis veces, sobre todo en las tierras indígenas, donde solo en los últimos diez años aumentó un 495 por ciento.

En la actualidad, la Amazonia concentra el 72 por ciento de toda la minería brasileña ocupando casi 150 mil hectáreas, de las cuales 101 mil corresponden a minas ilegales.

CON EL GARIMPO EN LAS VENAS

Serra Pelada, la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil, y en su momento del mundo, ahora abandonada, fue descubierta en 1976, pero su explotación no comenzaría hasta 1980.

Aquella fiebre del oro provocó que miles de brasileños pobres emigraran hacia esa localidad buscando fortuna.

Entre ellos, una parte de la familia del ex presidente, encabezada por su padre, Percy Geraldo Bolsonaro, que hasta entonces oficiandaba de mecánico dental —sin título oficial— en el interior de Sao Paulo.

Percy Geraldo se instaló allí como garimpeiro, donde aún hoy lo recuerdan. En aquel entonces su hijo Jair ya se especializaba en paracaidismo en filas del Ejército, pero visitaba asiduamente a su familia en Serra Pelada.

En 1983, según consta en su legajo militar, Bolsonaro aprovechó sus vacaciones para viajar junto a otros cinco militares hasta el estado de Bahía, donde juntos se dedicaron a buscar oro.

De allí su pasión por el garimpo.

En julio de 2018 Bolsonaro grabó un video que difundió entre los garimpeiros, donde se le veía al

borde una corriente de agua utilizando la clásica batea de fondo cónico de los buscadores de oro.

Aseguró en ese video que “Siempre que puedo, paro en cualquier lugar para dar una ‘faiscada’”, como se conoce a la búsqueda de oro. Ya en otras ocasiones había afirmado que “El garimpo es un vicio, está en la sangre”.

SANGRE QUE PIDE MÁS SANGRE

Allí en Serra Pelada conoció al entonces interventor de la región, Sebastiao Rodrigues de Moura, más conocido como “Mayor Curió”, célebre por haber comandado las fuerzas que masacraron a la guerrilla de Araguaia entre 1972 y 1974.

En esa operación que murieron “oficialmente” 52 personas, aunque innumerables fuentes aseguran que hubo varios centenares de víctimas, muchas de ellas sin ningún vínculo con los

revolucionarios. Esta “proeza” le valió obtener su puesto de Interventor.

Entre él y Bolsonaro ocurrió un “flechazo a primera vista”. El discurso radical y anticomunista del ex presidente cautivó de tal forma a Curió que se declaró su más entusiasta admirador, convirtiéndose en uno de los más firmes promotores de su carrera.

Curió impuso su “metodología” en Serra Pelada: formalmente prohibió el ingreso de alcohol y mujeres a la zona de la mina, aunque de hecho toleró un jugoso mercado negro que, se dice, controlaba él mismo con sus “bate-paus”³, y en el cual todo se pagaba en oro.

Hasta tal punto llegó su predicamento que la villa contigua a la mina fue refundada como ciudad con el nombre de Curionópolis. En 1982 Curió fue elegido diputado federal, en 2000 llegó a Prefecto de Curionópolis, cargo que ejerció hasta 2008, cuando fue destituido por enriquecimiento ilícito, corrupción y varios otros cargos que convenientemente saldó pagando una multa.

³ Verdaderos comandos paramilitares. Curió empleó en Serra Pelada las mismas tácticas antiguerrilleras que en Araguaia, y el clima que se respiraba en la mina y alrededores era el de una dictadura militar.



PARA SAQUEARTE MEJOR

En los hechos, fue Curió quien consolidó las bases del actual modelo de crimen organizado que, mayormente, controla la explotación minera ilegal con base en grupos mafiosos que se disputan yacimientos y territorios que son “licitados” ante las autoridades locales, o arrancados a punta de fusiles de asalto en una situación de guerra permanente. Bolsonaro lo desarrolló exponencialmente.

En todas las regiones garimpeiras Bolsonaro es prácticamente idolatrado.

Y se trata de un amor correspondido. Ya en julio de 2018 más de 500 empresarios garimpeiros de Serra Pelada le entregaron una nota, en la cual reclamaban la eliminación de las restricciones ambientales para la minería mecanizada en un área de 100 hectáreas que comprende a Serra Pelada.

Al recibir la solicitud, Bolsonaro declaró que “El garimpeiro es un ser humano y no debe seguir siendo tratado como una persona de tercera o cuarta categoría. Si Dios quiere, vamos a buscar medios para que puedan trabajar con dignidad y seguridad”.

Los garimpos se multiplicaron exponencialmente bajo la protección y promoción de Bolsonaro.

UN PROPÓSITO ENTRE CEJA Y CEJA

Bolsonaro no está improvisando. Desde hace años persigue esta idea fija. En 2016, cuando era diputado, presentó el Proyecto de Ley 191/2020, que proponía “la exploración de recursos minerales, hídricos y orgánicos en tierras indígenas”. Y siempre está al acecho: la guerra en Ucrania le dio un pretexto, y usando su cuenta de Twitter volvió a reflotar la antigua iniciativa.

El pretexto fue que Brasil importa fertilizantes a base de potasio desde Rusia. Sólo en 2021 compró este insumo agrícola en ese país por valor de 1.400 millones de dólares. Ante una posible interrupción del abastecimiento ruso, Bolsonaro consideró en Twitter que explorar tierras indígenas para conseguir ese mineral podría resolver la carencia: “Con la guerra Rusia-Ucrania, corremos el riesgo de la falta de potasio o el aumento de su precio. Nuestra seguridad alimentaria y el agronegocio [...] exigen de nosotros, Ejecutivo y Legislativo, medidas que nos permitan la no dependencia externa de algo que tenemos en abundancia”, sostuvo entonces.

Detrás del tal entusiasmo se encuentran los intereses de las grandes corporaciones mineras que acechan con codicia los emplazamientos de las poblaciones originarias.

Nueve de ellas ya han solicitado permisos para la explotación de posibles yacimientos en tierras indígenas como la brasileña Vale do Rio Doce, la canadiense Belo Sun o la británica Anglo American.

En los últimos cuatro años el sector experimentó un crecimiento inédito, explosivo.

En pleno siglo XXI las regiones amazónicas con intensa actividad minera ilegal viven una realidad paralela en la cual los precios, inclusive de las cosas más cotidianas, suelen ser

disparatados, la ley y los derechos son los del revólver más grande, las influencias políticas y judiciales se adquieren casi a cara descubierta y el modelo de acumulación más exitoso es aquel que depreda más, roba más, contamina más. Un escenario que se podría definir como “el paraíso bolsonarista”.

De hecho, viajeros que se han aventurado recientemente por esas comarcas describen un paisaje humano que se podría calificar como el kilómetro cero del bolsonarismo: allí se come, se bebe, se respira y se sueña al ritmo del ultraderechismo.

Pegotines, banderas, afiches, pins, cartelería callejera: todo está aún en clave Bolsonaro y su “amor por el garimpo”.

garimpan relativamente cerca de ciudades y centros poblados no son objeto de censos o relevamientos de alguna clase.

Es la anti ley de la selva. Donde antes la naturaleza organizaba la vida y su cambio y reproducción permanente en un flujo sostenible,

biodiverso y sanador, hoy va quedando un rastro de pobreza, violencia, contaminación y muerte.

Allí las verdaderas fortunas se amasan arrebatando tierras, comprando influencias, amenazando a los competidores, contaminando las aguas, devastando la floresta, esclavizando trabajadores, expulsando indígenas y, muy a menudo, “corriendo bala”, sobre todo contra los más vulnerables.

El Estado “modo Bolsonaro”, ejerciendo su “sagrado derecho a la complicidad”, se enfocó en favorecer el crimen.

Se agrega a esta compleja situación la evolución del precio del oro que no ha cesado de aumentar en los últimos años. Para poner un ejemplo: a fines de 2019 la onza de oro valía 1.460,15 dólares, y a fines de 2022 la misma cantidad alcanzó los 1.920,78 dólares; en los últimos diez años el precio del oro ganó un 34 por ciento.

Esto ha atraído a grupos narcotraficantes que no sólo utilizan los corredores abiertos en la selva por los garimpeiros para trasladar droga, sino que además invierten enormes cantidades de dinero “comprando derechos” de los principales garimpos o adquiriendo oro por encima de su cotización oficial como forma de blanquear capital fruto del tráfico.

La presencia cada vez mayor de estos poderosos grupos delictivos agrega aún más violencia en la región.

LA DESINFORMACIÓN (MAL) INTENCIONADA

Nadie sabe cuántos garimpeiros hay en Brasil. Las cifras dan saltos de circo entre los 80 mil y los 800 mil.

Pueden ser incluso más, porque muchos de ellos se ocupan en territorios sólo accesibles por aire o por agua, e incluso aquellos que



ENTRE LA ESPADA Y LA FLORESTA

Los que primero sienten las consecuencias de esta realidad son los pueblos indígenas que habitan la Amazonia desde tiempos inmemoriales.

Son ahora unas 850 mil personas, cuya mayor parte vive en reservas que constituyen el 12 por ciento del territorio brasileño.

Por lo menos en teoría, ya que enormes áreas de estas tierras de conservación han sido arrebatadas mediante violencia por fazendeiros, garimpeiros, madereros y aventureros de toda laya.

Además de la invasión permanente de sus territorios cuya propiedad les está constitucionalmente reconocida, algunos grupos indígenas padecen conflictos internos creados por los cantos de sirena de los grandes garimpeiros y, a menudo, de las propias autoridades locales, que les prometen un futuro económicamente venturoso a cambio de permisos para extraer minerales en sus tierras.

La norma, sin embargo, ha sido siempre que los garimpos se establezcan sin autorización y, sistemáticamente, generando conflictos violentos con los indígenas que suelen llevar las de

perder. Esta modalidad gansteril es la que se exacerbó como nunca antes en la región amazónica: Bolsonaro le soltó la cadena a la bestia.

GUERRA DE BAJA INTENSIDAD

La ofensiva bolsonarista fue total.

Además de calificar a los indígenas de “casi seres humanos como nosotros”, pretendió —una

vez más— poner fin a la política de demarcación de territorios de conservación concedidos a los habitantes originarios.

Los legisladores bolsonaristas, garimpeiros y ruralistas aliados, presionaron siempre al gobierno para que adoptase medidas que acotaran aun más la protección sobre esos territorios y derechos indígenas. Algo que Bolsonaro siempre se propuso.

Durante el pasado año se reportaron varios casos de ataques, incendios y hasta tiroteos contra viviendas de líderes de las comunidades Yanomami y Munduruku en los estados amazónicos de Roraima y Pará.

Todo indica que fue obra de un grupo de prospectores mineros que estaban trabajando clandestinamente en las reservas y fueron denunciados por los nativos.

Los referentes indígenas estiman que enfrentaban la situación más peligrosa desde el fin de la dictadura, en la década de los 80. Las amenazas de muerte estuvieron a la orden del día y los indígenas sienten que aún viven en un “estado de guerra” constante.



Este contexto de violencias, saqueos y contaminación pretendió ser ampliado y consolidado mediante proyectos de ley⁴ que premiaban a los “grileiros”, apropiadores fraudulentos de tierras fiscales, legalizando sus estafas, y desmontaban la legislación que fija la demarcación de tierras indígenas, para permitirles el acceso a grileiros, madereros, ganaderos, sojeros y garimpeiros.

Faltó tiempo para que consiguieran aprobarlos, y solo la victoria de Lula desarticuló ese propósito.

Los mayores territorios indígenas de Brasil se encuentran en la

LOS NUEVOS “CRUZADOS”

Llamó mucho la atención entre muchos legisladores de la entonces oposición y de activistas sociales la inclusión de esos “terceros” que, según todo indica, serían, además de los grileiros y mineros, los misioneros evangélicos, que “arden” por llevar “la palabra de Cristo” a los indígenas aislados.

Por supuesto, de la misma fe religiosa que Jair Bolsonaro, quien había tenido la previsión de nombrar presidente de la entonces Fundación Nacional del

selva, cubriendo una cuarta parte de la región amazónica.

Se ha confirmado la presencia allí de 28 grupos nativos que aún no han sido contactados, y se estima que puede haber hasta 70 más en similares condiciones.

Uno de estos proyectos de Ley — el PL490— hubiese permitido forzar el contacto con estos grupos altamente vulnerables, siempre que se invocara un “interés nacional superior”, e incluso habría habilitado que “terceras personas” integraran los equipos de contacto.

⁴ PL 490 y PL 2633

Indio (FUNAI)⁵ a Marcelo Xavier da Silva, entidad cuya misión oficial es “proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas de Brasil”, según anuncia en su página web.

Da Silva fue denunciado en reiteradas ocasiones por las comunidades indígenas, bajo la acusación de complicidad con los intereses de las agroempresas y la minería ilegal.

⁵Ahora Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas.

No puede sorprender entonces que Da Silva sea, además, agente de la Policía Federal.

Ya el pasado año ordenó a un equipo de sus colegas que investigaran a varios líderes indígenas, a quienes acusó de difamación para “menoscabar la imagen internacional de Brasil”, o de sabotaje del tendido de líneas de alta tensión.

Los indígenas sostienen que la ex FUNAI pasó de proteger sus comunidades a perseguirlas.

LA ULTRADERECHA VA POR TODO

Toda la política implementada y proyectada por Jair Bolsonaro en la Amazonia desde su asunción como presidente fue una incitación a la violencia, al zarpazo ilegal sobre los recursos naturales, a la codicia, el individualismo, la corrupción, la impunidad y el sometimiento de los más vulnerables ante el poder del dinero y las influencias que él compra.

Ninguna de estas lacras sociales es realmente nueva en la región, no comenzaron con Bolsonaro,



pero a su impulso se extendieron y multiplicaron sin control, se “viralizaron” (para usar una analogía al uso).

Ahora habrá que desmontar empresas delictivas, organizaciones criminales mecanizadas, armadas y capitalizadas que sustituyeron al Estado y sus leyes.

Si esta forma de usar y abusar de la Amazonia, de sus riquezas y habitantes no se detiene y se revierte en Brasil, más temprano que tarde asistiremos a una reconfiguración completa e irreversible de lo que hemos conocido como la floresta amazónica brasileña.

Con todos los daños previsible para las comunidades tradicionales que allí habitan, para las organizaciones sociales de trabajadores, trabajadoras y activistas, para las corrientes de agua dulce, la biodiversidad, la absorción de CO2 y su impacto sobre el cambio climático mundial, entre otros.

Ante este cuadro, muchos analistas no dudan en acusar a Bolsonaro y sus secuaces de haber ejercido un “terrorismo de Estado” al utilizar sus estructuras para imponer una “guerra sucia” contra la sociedad civil y el ambiente, y de promover y amparar delitos de lesa

humanidad, como el genocidio de las comunidades indígenas, obligadas a convivir con la contaminación de la minería ilegal y siendo expulsadas de sus reservas mediante la intimidación constante, la persecución, las amenazas y hasta la muerte.

COHERENCIA Y COMPROMISO

En marzo próximo se estarán cumpliendo 18 años de cuando la Rel-UITA, junto a la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura (CONTAG) y la Federación de Trabajadores de la Agricultura (FETAGRI) de Pará, culminaban un proyecto exhaustivamente preparado por el cual un equipo de tres personas, con asesoramiento y participación local, realizaba un video in situ, en el marco de la Campaña Internacional “Basta de violencia en el campo”.

Durante un mes ese equipo viajó miles de kilómetros dentro de la Amazonia paranaense, y lo hizo por tierra, agua y aire, realizando entrevistas a sindicalistas y activistas amenazados de muerte, relevando el testimonio de los compañeros, compañeras y familiares de los militantes asesinados por defender los derechos sindicales, sociales y ambientales de sus comunidades.

Haciendo un juego de palabras en portugués, acuñamos en aquel entonces la expresión: “Quem mata, desmata”, esto es, “Quien mata, tala”, para describir la

coincidencia entre las mismas personas, empresas y modelo de desarrollo amazónico de aquellos que desforestan, extraen madera noble, incendian, devastan la selva para plantar soja transgénica o introducir ganado, se dedican a la minería ilegal, al lavado de dinero, el tráfico de influencias y el narcotráfico.

La investigación periodística y el video mostraron cómo las muertes de sindicalistas y activistas, de líderes indígenas, y la devastación de la naturaleza tienen el mismo origen, son fruto del mismo esquema de explotación a cualquier costo, sea en vidas humanas, en floresta arrasada, en agua dulce envenenada o en relaciones sociales signadas por el sometimiento del más débil y la impunidad de los criminales, asegurada por instituciones estatales corrompidas hasta el tuétano.

Ese trabajo también permitió reafirmar que la memoria de cada compañera o compañero caídos no sólo permanece en las organizaciones sociales y comunitarias, sino que también se transforma en motivación y guía para quienes permanecen sosteniendo las banderas de los derechos humanos y sociales, y es inspiración para aquellos que se suman a la larga marcha por la vida, la dignidad y la justicia.



Por eso, hoy, 17 años después de aquella campaña, reafirmamos nuestro compromiso inextinguible de acompañar y apoyar todas las luchas sindicales y sociales, todas las denuncias y advertencias, todos los reclamos que se rebelen contra la impunidad, la ignorancia, el egoísmo y el mesianismo causantes de los múltiples ataques que sufren las personas y la floresta en la Amazonia.

Continuaremos caminando junto a ellas y ellos, y lo haremos cargados con memoria y propuestas, con esperanza y confianza en que la sociedad brasileña sabrá dotarse de las herramientas necesarias para asegurar la vida, la paz y la armonía en la diferencia.

Fuentes: Amazon Watch, Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), Página 12, The Intercept Brasil, Wikipedia, Agencia Xinua, www.preciodeloro.org, Reuters, AFP, EFE, National Geographic, Greenpeace, El País de Madrid, La Diaria, The Guardian e información propia.

Texto: Carlos Amorín
Imágenes: Allan McDonald
Diseño: Agustín Méndez (wopi)

